

Cultivos ilícitos, participación política y confianza institucional

Miguel García Sánchez¹
Ph.D. en Ciencia Política, Profesor Asistente
Departamento de Ciencia Política
m.garcia268@uniandes.edu.co

La existencia de una relación entre el fenómeno del narcotráfico y la política colombiana ha sido materia de numerosos estudios académicos que han demostrado que las organizaciones criminales dedicadas al cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas han tenido un fuerte impacto en el incremento de la violencia política (Thoumi 2002b: 165), en los niveles de corrupción (Tullis 1995) y en la calidad de la democracia (Hartlyn 1993). Así mismo, estas organizaciones han “capturado” algunas estructuras estatales y han modificado la cultura política. No obstante, la producción académica sobre el vínculo entre narcotráfico y política en Colombia ha ignorado el impacto de este fenómeno sobre la conducta y actitudes políticas de los individuos. Este capítulo intenta superar ese vacío aportando información empírica sobre una relación que resulta de la mayor relevancia para entender la magnitud del impacto político del negocio de las drogas. Si el narcotráfico, como un fenómeno sociológico, condiciona la manera como los ciudadanos se comportan políticamente y construyen sus opiniones sobre las instituciones públicas, se podría validar con evidencia del nivel micro -hasta ahora inexistente-, el argumento según el cual el desarrollo y consolidación del narcotráfico en Colombia ha estado acompañado del afianzamiento de importantes transformaciones en la cultura política del país.

La pregunta general que intenta responder este capítulo es la siguiente: ¿son la conducta y las opiniones políticas de los ciudadanos que viven en zonas afectadas por el narcotráfico, radicalmente diferentes de las de aquellas personas que habitan regiones no afectadas por este fenómeno? Más específicamente, ¿cuál es la incidencia de la presencia de cultivos ilícitos y de las distintas estrategias de erradicación de los mismos, en la participación política individual y en las calificaciones ciudadanas de confianza hacia agentes estatales y no estatales?

¹ Este capítulo contó con la asistencia de investigación de Diego Felipe Gómez y Janneth Angélica Vargas. Agradezco a Adriana Camacho, Daniel Mejía, Elvira María Restrepo y a un comentarista anónimo por sus observaciones a las versiones preliminares de este capítulo.

Este capítulo parte del supuesto según el cual la conducta política no puede ser entendida exclusivamente a partir de factores de carácter individual sino considerando también la relación de los ciudadanos con su entorno social y político (Huckfeldt 1986). Si el fenómeno del narcotráfico ha generado lo que algunos han llamado una “cultura mafiosa”, la conducta y las actitudes políticas de los ciudadanos que viven en contextos afectados por las distintas manifestaciones del negocio de las drogas ilícitas deberían ser diferentes de aquellas de quienes no viven en esos contextos. La literatura cualitativa sobre los efectos sociales de las organizaciones ilegales ha demostrado que el narcotráfico ha sido capaz de modificar la definición de hábitos y valores de ciertas poblaciones colombianas (Duncan 2009). Si esto es así, sería factible argumentar que las transformaciones estructurales impulsadas por el narcotráfico deberían manifestarse en cambios sobre la conducta y actitudes políticas de los ciudadanos.

Este capítulo consta de seis secciones. Después de esta introducción, la segunda presenta una breve revisión de la literatura sobre los impactos políticos del narcotráfico, haciendo énfasis en los estudios que señalan el vínculo entre el negocio de la droga y la cultura política. En la tercera, se presentan algunas intuiciones teóricas sobre la relación entre el fenómeno del narcotráfico y la conducta y actitudes políticas de los ciudadanos. La cuarta, describe los datos y presenta la estrategia análisis empírico. La quinta sección discute los resultados empíricos. La última presenta las conclusiones de este estudio y discute sus principales implicaciones en términos de políticas públicas.

Narcotráfico, Política y Sociedad

La investigación sobre las repercusiones sociales y políticas del narcotráfico en Colombia ha demostrado que los efectos de este fenómeno han sido grandes así como diversos. En términos generales, los autores que han trabajado el vínculo entre narcotráfico, sociedad y política se podrían clasificar al menos en tres grupos. Por una parte, están quienes han estudiado la relación entre el narcotráfico y las numerosas crisis políticas que ha sufrido Colombia desde los años 80. En segundo lugar, están quienes han enfatizado la relación entre narcotráfico, grupos armados ilegales y aumento de la violencia política. Finalmente, se encuentran los estudios que demuestran el papel del narcotráfico en la alteración de prácticas sociales y políticas. Este capítulo se ubica, de cierta manera, en la última tendencia.

Los estudios sobre la relación entre narcotráfico, prácticas sociales y políticas, han intentado comprender, por una parte, el vínculo entre las mafias del narcotráfico y ciertas características de la sociedad colombiana, como el caciquismo, las economías ilegales vinculadas al contrabando, la debilidad institucional del Estado, la ausencia de modernidad, e incluso los llamados “imaginarios” de la ilegalidad (Betancourt y García 1994; Hernández 1997; Salazar 2001). Una segunda línea, dentro de esta tendencia analítica, la componen trabajos que han analizado las transformaciones sociales y políticas producto de la penetración de la llamada cultura de la ilegalidad. Estos estudios enfatizan la construcción de pactos entre agentes ilegales y representantes del orden legal, así como la adopción de prácticas mafiosas por parte de algunos agentes estatales. Aquí, buena parte de la producción académica ha mostrado cómo el narcotráfico, en un intento por sostener sus inversiones, ha desarrollado redes de influencia sobre el poder político y estatal dando paso a fenómenos generalizados de corrupción, a la infiltración mafiosa de algunas agencias estatales, la financiación de políticos con dineros ilícitos y ha terminado por estimular modelos de orden social basados en la “dominación brutal armada” (Camacho 1988; Camacho et al. 1999; Thoumi 2002a). Estudios recientes que se centran en un seguimiento al impacto político de la ilegalidad a nivel local, han ido más allá al argumentar que el narcotráfico en asocio con los actores armados (particularmente los paramilitares) y algunos políticos locales, ha terminado por consolidar lo que algunos han llamado nuevos “órdenes sociales” (Camacho 2009). Esta idea supone que el narcotráfico habría tenido la capacidad de redefinir, a nivel local, los modos de producción, el ejercicio del poder político, los grupos y relaciones sociales, los aparatos estatales e incluso los valores y hábitos de la población (Duncan 2009: 165).²

Aunque este capítulo se enmarca en los estudios que señalan la capacidad del narcotráfico para modificar los contextos sociales y políticos, a diferencia de éstos, hace énfasis en la relación entre narcotráfico y conductas y actitudes políticas individuales. Si la incidencia del fenómeno de las drogas en algunas regiones del país ha dado origen a transformaciones del orden social, se podría afirmar que la conducta y las actitudes de los individuos también sufrirían modificaciones significativas.

² De manera más precisa, la construcción de esos “nuevos órdenes” sociales supone el desmonte del Estado central y la aparición de estructuras y relaciones sociales y políticas contrarias a la idea de una sociedad moderna.

Participación política y confianza institucional bajo la sombra del narcotráfico

En Colombia, las mafias de las drogas, la violencia política, y los actores armados, en tanto fenómenos capaces de alterar el funcionamiento del Estado y la sociedad, habrían inducido procesos de crisis y habrían sido capaces de alterar el contexto social y político en el que los individuos articulan sus decisiones y actitudes políticas. Los factores de carácter individual no pueden explicar enteramente las acciones y opiniones de los ciudadanos. Junto con ellos, el comportamiento político debe ser entendido en términos de la relación de las personas con el entorno y los factores ambientales que afectan las decisiones individuales (Huckfeldt 1986).

De acuerdo con los estudios sobre el impacto del contexto social en la conducta política, existen por lo menos dos mecanismos a través de los cuales los ambientes políticos y sociales pueden afectar las preferencias y acciones políticas de los ciudadanos. En primer lugar están los contextos impuestos estructuralmente (Huckfeldt 1986; Huckfeldt y Sprague 1987). Éstos son condiciones sociales y políticas externas al individuo que pueden tener un efecto directo sobre la conducta política debido a que limitan las experiencias y decisiones de los ciudadanos. Por otra parte, aparecen los contextos sociales y políticos definidos en términos de redes sociales. Éstas son interacciones interpersonales, que aunque son producto de decisiones individuales, se ven afectadas por las oportunidades y limitaciones del contexto social (Huckfeldt y Sprague 1987).

El narcotráfico modificaría lo que se ha llamado el contexto estructural, en la medida en que este fenómeno es capaz de alterar aspectos como el funcionamiento de la economía, las relaciones sociales, o el uso de la violencia, llegando incluso a redefinir los “órdenes sociales”. En consecuencia, los ciudadanos adaptarían o modificarían sus conductas y actitudes políticas como producto de los cambios estructurales estimulados por el narcotráfico. Para evaluar la posible relación entre el narcotráfico y la conducta y actitudes políticas individuales, este capítulo analiza la incidencia de cultivos ilícitos -en tanto uno de los componentes de la cadena del narcotráfico- y estrategias de erradicación de los mismos en la decisión de los ciudadanos de involucrarse en formas electorales (voto) y no electorales de participación política (protestas),³ y

³ Estas “formas” de participación no son mutuamente excluyentes. Es decir, el que un ciudadano vote en las elecciones, no significa que no se involucre en marchas o protestas.

sobre las actitudes de confianza de las personas hacia la alcaldía local, la Policía, las FARC y los paramilitares.⁴

Participación y confianza institucional como principales variables dependientes de este capítulo son dos manifestaciones centrales del funcionamiento de la política moderna a nivel individual. La participación política, particularmente en su forma electoral, representa la aceptación, creencia y vinculación del ciudadano en las elecciones como uno de los mecanismos centrales del funcionamiento de una democracia. Por su parte, la confianza en las instituciones públicas captura el sentimiento de los ciudadanos hacia el Estado, lo cual es central para el funcionamiento de los gobiernos, pues allí donde la ciudadanía confía en sus instituciones, éstas pueden actuar sin recurrir a la fuerza y no necesitan consultar cada decisión con la población (Mishler y Rose 1997; Espinal et al. 2006).

Si el narcotráfico ha contribuido al debilitamiento del Estado y a la aparición de estructuras y políticas contrarias a la idea de una sociedad moderna, *en aquellas regiones donde el negocio de las drogas tiene mayor incidencia, los niveles de participación electoral y la confianza ciudadana en las instituciones estatales serían significativamente menores que allí donde las mafias de la droga no tienen mayor incidencia*. La naturaleza de esta relación se podría entender teniendo en cuenta que las modificaciones al contexto político y social inducidas por el narcotráfico le dejarían claro al ciudadano que el funcionamiento de lo político no estaría siendo mediado por los procedimientos y las instituciones estatales. Si los procesos electorales se encuentran manipulados o han sido instrumentalizados por las mafias de la droga, o por éstas en asociación con los actores armados, la participación electoral perdería importancia para el ciudadano en tanto su voto no estaría teniendo mayor incidencia en la definición del poder político. Por otro lado, si la influencia de las mafias sobre los ordenes sociales locales ha estado vinculada a las dinámicas de control territorial de los actores armados (Duncan 2009), se esperaría que las regiones del país influenciadas por el fenómeno del narcotráfico sean políticamente homogéneas dado que el control territorial de los actores armados produciría lo que Gibson (2005) ha denominado autoritarismos sub-nacionales. Como lo han demostrado investigaciones

⁴ El fenómeno del narcotráfico supone una cadena que va desde el cultivo hasta la comercialización de las drogas. El énfasis que pone este trabajo la fase de cultivo implica que sólo se está evaluando la relación entre una de las múltiples dimensiones del fenómeno del narcotráfico y las opiniones y conductas políticas individuales. Esta decisión se sustenta en la disponibilidad de información empírica sobre la incidencia de cultivos ilícitos a nivel municipal. Sobre las otras fases del negocio de las drogas no existen cuantificaciones similares.

recientes, cuando el ambiente político tiende hacia la homogeneidad, los flujos de información política así como los esfuerzos de movilización electoral de los partidos disminuyen, estimulando una reducción en la participación electoral (Gimpel y Lay 2005: 210). En efecto, la evidencia empírica sobre el impacto de agentes ilegales en la participación política ha demostrado que en las zonas en las que se ha consolidado el control territorial de los paramilitares, los ciudadanos tienden a participar relativamente menos en los procesos electorales que allí donde este actor armado no goza de dicha influencia (García 2009).

En el caso de las formas de participación no electoral, *se podría afirmar que la incidencia local del narcotráfico aumentaría la probabilidad de que los ciudadanos se involucren en marchas y protestas*. Si se parte del supuesto de la precariedad de las estructuras estatales en zonas con presencia de cultivos ilícitos, sería acertado afirmar que la ciudadanía en dichas áreas se enfrentaría cotidianamente a la cara coercitiva del Estado colombiano. Si esa dimensión coercitiva está en muchas ocasiones asociada a los esfuerzos estatales por erradicar cultivos ilícitos, sería factible que la ciudadanía desarrollara una relación contenciosa con el Estado, debido al papel que éste juega en la desarticulación de las economías basadas en la producción de drogas ilegales. En síntesis, los ciudadanos que viven en zonas con influencia del narcotráfico serán más proclives a participar en la esfera pública a través de protestas que electoralmente.

En relación al tema de confianza institucional, se podría afirmar que quienes representan al Estado colombiano a nivel local no contarán con la confianza de la ciudadanía, si estos agentes se encuentran al servicio o bajo la influencia de actores ilegales. *Serían los actores ilegales quienes contarían con la confianza de la población*, lo que sería aun más evidente si la economía local y la provisión de bienes y servicios están mediados por agentes ilegales como las redes mafiosas. Esta expectativa encontraría respaldo en los resultados de estudios comparados sobre confianza en instituciones gubernamentales que han demostrado que ésta es una función del desempeño de los gobiernos en materias como la economía y la provisión de seguridad (Espinal et al. 2006; Mishler y Rose 2001).

Como se mencionó anteriormente, este capítulo busca también evaluar el impacto de algunas de las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos sobre participación y confianza. Esas estrategias, que se resumen fundamentalmente en erradicación manual o aspersión aérea, tendrían distintos efectos sobre la presencia de los ciudadanos en la esfera pública y en sus

percepciones de confianza hacia agentes estatales y no estatales. En zonas donde los cultivos ilícitos son la base de la economía local, y en torno a ellos se han construido ordenes locales, *la erradicación en cualquiera de sus manifestaciones acarrearía consecuencias negativas en términos de participación y confianza en las instituciones del Estado. Sin embargo, el efecto negativo de la erradicación sería más fuerte en el caso de la aspersión aérea.*

Las intuiciones teóricas formuladas hasta este punto suponen que el narcotráfico, entendido como un contexto estructural, estaría teniendo un efecto homogéneo sobre el comportamiento y las actitudes políticas de los ciudadanos. Sin embargo, la literatura especializada ha demostrado que el efecto de los contextos estructurales se encuentra mediado por ciertas características individuales (Huckfeldt y Sprague 1993; Weatherford 1982; Gimpel y Lay 2005). Desde este punto de vista es válido preguntar, ¿qué tipo de personas serían más resistentes a la influencia del narcotráfico? Un estudio reciente demostró que, en Colombia, los simpatizantes de los partidos minoritarios fueron más susceptibles al efecto de los contextos violentos que quienes se identificaron como militantes de los partidos tradicionales (García 2009). A pesar de este resultado, es difícil dar una respuesta específica a la pregunta formulada anteriormente teniendo en cuenta que las redes mafiosas no tendrían identidades e intencionalidades políticas tan claras como las de los actores armados. Es por esto que en este punto no se formula ninguna hipótesis respecto a qué ciudadanos serían más afectados en sus conductas y actitudes políticas por el narcotráfico. Sobre este tema simplemente se dirá que algunas características de los ciudadanos tendrían la capacidad de modelar el efecto del narcotráfico. La identificación de esas características se llevará a cabo en el momento de los análisis empíricos.

Datos y método

Este capítulo trabaja con una estructura jerárquica de datos. Este tipo de bases de datos recopilan información de al menos dos unidades de análisis. En este caso, se trabaja por una parte, con factores de tipo individual (nivel 1), y por otra, de nivel municipal (nivel 2). A través de una estructura jerárquica de datos es posible evaluar el impacto de factores contextuales, como los cultivos ilícitos, sobre la conducta política de las personas, al tiempo que se controla por el efecto de variables individuales.

La información de nivel individual proviene de una encuesta representativa a nivel nacional, que llevó a cabo en 2005 el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por su sigla en inglés), de la Universidad de Vanderbilt. El estudio del LAPOP entrevistó 3.083 adultos de 75 municipios colombianos.⁵ A nivel contextual, este trabajo incluye datos sobre extensión de cultivos de coca, tipo de estrategia de erradicación, niveles de control territorial de los actores armados y características socioeconómicas de los 75 municipios incluidos en la encuesta.

Descripción de las variables

Este trabajo estudia tres tipos de variables dependientes: voto, participación en protestas, y confianza. *Voto* es una variable dicotómica que mide si un individuo participó en las elecciones locales de 2003. La variable *Protestas* también es una variable dicotómica que captura si el encuestado ha participado en marchas o protestas públicas. Finalmente, la variable *Confianza* mide qué tanto confían los ciudadanos en la alcaldía local, la Policía, las FARC y los paramilitares.⁶

Debido a que en este artículo el análisis de la incidencia del narcotráfico sobre la conducta y actitudes políticas individuales se enfoca en la fase de cultivo, las principales variables independientes de este estudio, cada una de las cuales fue medida al nivel municipal, son *hectáreas cultivadas de coca y estrategia de erradicación*. La primera es una variable continua que mide el número de hectáreas de coca cultivadas para el año 2005 en cada uno de los 75 municipios incluidos en este estudio.⁷ Por su parte, la segunda variable mide, a través de una escala de tres puntos, el tipo de estrategia de erradicación de cultivos ilícitos que se empleó entre enero de 2004 y mayo del 2005, mes en el que se realizó el estudio del LAPOP, en cada uno de

⁵ Esta encuesta trabajó con dos muestras. La primera es un estudio representativo a nivel nacional que incluyó 1.487 adultos de 47 municipios. La segunda es una muestra de 1.596 adultos, representativa de las regiones en conflicto. La última muestra entrevistó a individuos provenientes de 28 municipios.

⁶ Cada una de las medidas de confianza fue capturada en una escala de 1 a 7, donde 1 representa total desconfianza en la institución u organización evaluada y 7 representa total confianza en la misma. La escala original fue transformada a una escala de 0 a 100.

⁷ Aunque esta variable no considera el tamaño del municipio, el coeficiente de correlación entre esta variable y una medida de la incidencia de los cultivos de coca que controla por el tamaño de cada municipio (hectáreas cultivadas / superficie en hectáreas del municipio) fue de 0.9445 ($p < 0.001$). A pesar de esta correlación, se estimaron los efectos de las dos versiones de la variable cultivos ilícitos. Dado que los resultados para las dos versiones de la variable en cuestión fueron muy similares, y que la interpretación de los resultados es más intuitiva si se trabaja con la versión no ponderada de la medida de cultivos ilícitos, en este artículo sólo se reportan los resultados de la relación entre hectáreas de coca no ponderadas y las variables dependientes. Los resultados de los modelos con la medida de cultivos ilícitos ponderada por el tamaño del municipio pueden ser solicitados al autor.

los municipios incluidos en este capítulo. La escala de tres puntos busca capturar la “radicalidad” de la estrategia de erradicación utilizada. Un puntaje de cero (0) indica que en el municipio en cuestión no se aplicó ninguna estrategia de erradicación. Un puntaje de uno (1) indica que en el municipio se utilizó la erradicación manual de cultivos. Finalmente, un puntaje de dos (2) representa que, en el municipio en cuestión, sólo se usó la erradicación por aspersión aérea o se combinaron las dos estrategias de erradicación. El último caso representa el escenario más “radical”.⁸

Este estudio controlará por otros factores de carácter contextual e individual. A nivel contextual se incluyen, dos variables (*Control guerrillero* y *Control paramilitar*) que miden la intensidad del control territorial ejercido a nivel municipal por guerrillas y paramilitares.⁹ En segundo lugar, el estudio también considera las condiciones económicas contextuales,¹⁰ a través del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (*NBI*). A nivel individual se incluyen una serie de factores que tendrían un impacto significativo sobre la participación política y las percepciones de confianza. Estos son: educación, edad, género, estatus socioeconómico, urbanización, apoyo al sistema político, eficacia política externa,¹¹ sofisticación política,¹² involucramiento en actividades partidistas, identificación partidista tradicional, evaluaciones sociotrópicas de la economía y un índice de provisión de bienes públicos.¹³

Estrategia empírica

⁸ Debido a que apenas en un municipio de la muestra se usó exclusivamente la erradicación por aspersión aérea, se decidió unir en la última categoría este tipo de municipios y aquellos donde se combinaron las dos estrategias.

⁹ Estas variables se miden en una escala de 0 a 3 donde el menor valor indica ausencia de control del actor armado en cuestión, mientras que un valor de tres (3) representa que el actor armado ejerce total control territorial en el municipio. Haciendo uso de una cuenta, ponderada geográficamente, de acciones armadas y violencia perpetrada por cada actor armado, se generó una clasificación de municipios según sus niveles de violencia, a través de una metodología conocida como “análisis longitudinal semiparamétrico basado en grupos” (Nagin 2005). A partir de esa clasificación se generaron las variables que capturan distintos niveles de control guerrillero y paramilitar. Para una descripción detallada del proceso de operacionalización de estas variables ver: García (2010).

¹⁰ Esta es una de las variables contextuales que en distintas investigaciones han demostrado tener un impacto significativo sobre la conducta individual, particularmente sobre la participación política. Al respecto véase: Giles y Dantico (1982), Huckfeldt (1979), Kenny (1992), y Mondak et al. (1996)

¹¹ Se refiere a la creencia de que el voto puede cambiar las cosas.

¹² Se refiere la calidad y organización de los conocimientos políticos de una persona.

¹³ Las variables estatus socioeconómico, urbanización, apoyo al sistema, sofisticación, involucramiento en actividades partidistas, evaluaciones sociotrópicas de la economía y provisión de bienes públicos, son continuas y fueron medidas en una escala de 0 a 100. A petición del lector se proveerá una descripción detallada de la operacionalización de todas las variables de nivel-1.

La relación entre cultivos ilícitos y estrategias de erradicación, y participación política y opiniones de confianza de los ciudadanos, se evaluó a través de varios modelos jerárquicos de dos niveles.¹⁴ Estos modelos permiten evaluar, de manera simultánea, los efectos de factores contextuales e individuales en las opiniones y conductas de las personas, lo cual es problemático a través de un análisis de regresión estándar.¹⁵ En este capítulo se trabaja con dos tipos de modelos jerárquicos. En el primero, las unidades de análisis de nivel-1 son individuos, y el valor de la variable dependiente para cada persona es una función de sus características individuales. En el nivel-2, las unidades de análisis son los municipios. Aquí, el intercepto (el resultado promedio) de la ecuación de nivel-1, se trabaja como la variable dependiente que es modelada como una función de factores contextuales (Raudenbush y Bryk 2002). Estos modelos permiten identificar hasta qué punto una variación en la incidencia municipal de cultivos ilícitos y estrategias de erradicación, predicen cambios significativos en los promedios municipales de participación y confianza, al tiempo que se controla por factores individuales.

En el segundo tipo de modelos jerárquicos trabajados en este capítulo, se modelan tanto el intercepto como algunas pendientes de la ecuación de nivel-1, como funciones de factores contextuales. Al trabajar las pendientes de nivel-1 como variables dependientes de las variables contextuales se configuran interacciones entre niveles; a través de ellas se puede identificar hasta qué punto el efecto de las variables de tipo individual es condicionado por las variables contextuales. En otras palabras, las interacciones entre niveles resultan útiles para identificar qué tipo de personas son más o menos susceptibles a las influencias del contexto social. Para todas las variables dependientes se estimó el primer tipo de modelo jerárquico, mientras que el segundo sólo se aplicó en algunos casos.¹⁶

¹⁴ Para una descripción detallada de la lógica de este tipo de modelos véase: Raudenbush y Bryk (2002)

¹⁵ Por ejemplo, para que una estimación hecha a través del método de mínimos cuadrados ordinarios sea eficiente y precisa, se requiere que los errores sean independientes, estén distribuidos normalmente, y tengan una varianza constante. Sin embargo, estos supuestos son violados cuando características del contexto son atribuidas a los individuos. Por ejemplo, si el nivel de desarrollo de un municipio se trabaja como si fuera una característica de cada persona encuestada en un determinado municipio, los errores de esas observaciones no serán independientes.

¹⁶ Debido a que este trabajo no propone unas expectativas teóricas específicas sobre cómo los factores contextuales asociados al narcotráfico condicionan el impacto de las variables de nivel individual en las variables dependientes, la definición de qué pendientes de la ecuación de nivel-1 iban a ser modeladas a partir de factores contextuales siguió un camino inductivo. En teoría se habrían podido modelar todas las pendientes usando los factores contextuales, sin embargo los modelos jerárquicos con múltiples interacciones entre niveles tienden a perder la eficiencia en la estimación de los parámetros (Raudenbush y Bryk 2002). Por tanto se optó por una estrategia que consistió en incluir interacciones entre niveles sólo en aquellos casos en los cuales las variables contextuales tuvieron puntajes t

Resultados

Esta sección presenta los resultados de una serie de modelos jerárquicos a través de los cuales se analizó el impacto de variables de nivel municipal asociadas con el narcotráfico en la participación política individual y en las percepciones ciudadanas de confianza en diversas organizaciones. La primera parte estudia la relación entre factores contextuales asociados al narcotráfico y la probabilidad individual de participar en elecciones locales y en protestas públicas. La segunda parte se enfoca en el impacto de cultivos ilícitos y estrategias de erradicación, en las percepciones ciudadanas de confianza hacia las alcaldías municipales, la Policía, las FARC y los grupos paramilitares.¹⁷

Cultivos ilícitos, estrategias de erradicación y participación política

Los modelos jerárquicos para voto en las elecciones locales de 2003 y participación en protestas, incluyen una serie de variables individuales en el nivel-1,¹⁸ y modelan el intercepto de la ecuación de nivel-1 usando cinco variables contextuales: NBI, nivel de control guerrillero, nivel de control paramilitar, hectáreas de coca cultivadas y estrategia de erradicación.

El análisis empírico, que se presenta en la primera columna del Cuadro 1, reveló que la probabilidad individual de votar está negativamente relacionada con un aumento en el área cultivada de coca. Esto indica que efectivamente existen diferencias significativas en los patrones de participación política electoral entre municipios afectados por cultivos ilícitos y aquellos carentes de este fenómeno. Según las probabilidades esperadas de votar, encontramos que en zonas donde no existen cultivos ilícitos esta probabilidad es de más o menos 0,57.

superiores a 1,5. Autores como Lee y Bryk (1989) y Weldon (2006) siguieron estrategias similares cuando trabajaron con interacciones entre niveles.

¹⁷ Las variables participación en elecciones locales y participación en protestas fueron estimadas usando un modelo de dos niveles para resultados binarios, mientras que los modelos para confianza institucional usaron una estimación de dos niveles para variables continuas.

Antes de llevar a cabo el análisis empírico que se presenta en esta sección, se estimaron varios *modelos no condicionales*. Éstos predicen la variable dependiente dentro de cada unidad de nivel-1, con tan sólo un parámetro de nivel-2 (el intercepto), el cual representa el promedio de la variable dependiente entre municipios. Los componentes de varianza de estos modelos proporcionan información acerca de si los factores de nivel contextual deben ser considerados para modelar la variable dependiente. Para todas las variables dependientes analizadas en este capítulo, los resultados de los *modelos no condicionales* indicaron la necesidad de considerar factores contextuales para entender su variación.

¹⁸ Los modelos condicionales para participación controlan por los siguientes factores de nivel individual: educación, edad, apoyo al sistema, género, estatus socioeconómico, urbanización, eficacia externa, sofisticación, identidad partidista tradicional, e involucramiento político.

Cuando las hectáreas de coca llegan al promedio, que para los municipios incluidos en la muestra que usa este capítulo es 110 hectáreas, la disminución de la probabilidad es prácticamente inexistente. Sin embargo, en aquellos municipios con el nivel máximo de hectáreas cultivadas de coca, la probabilidad de participar en elecciones locales cae a casi 0,30.¹⁹ Es importante tener en cuenta que en la mayor parte de los municipios de la muestra, el efecto negativo de los cultivos ilícitos sobre la participación electoral es pequeño, al no superar una disminución de 0,05 puntos en la probabilidad de votar. Solamente en casos extremos, donde los cultivos de coca llegan a proporciones muy altas, es que la probabilidad de votar sufre una caída importante. En estos casos se podría suponer que la influencia del negocio de las drogas ilícitas ha llegado a afectar el funcionamiento de lo social y lo político, y es en esos escenarios donde el ciudadano se marginaría de la participación electoral en la medida que las mafias de las drogas habrían instrumentalizado lo político de tal forma que el voto de los ciudadanos no estaría teniendo mayor incidencia en la definición del poder político. Dentro de los municipios incluidos en la muestra que se usa en este capítulo, la población que registra el mayor número de hectáreas cultivadas de coca es Tumaco, un municipio que ha tenido dificultades para integrarse institucional y económicamente a la nación, y que históricamente ha estado bajo la influencia de diversos agentes ilegales como contrabandistas, actores armados y mafiosos.

CUADRO 1 AQUÍ

Un resultado ciertamente sorprendente fue la inexistencia de una relación entre el endurecimiento de las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos y la participación en elecciones. Los encuestados que viven en municipios donde se combinaron la erradicación manual y la aspersión aérea no presentaron probabilidades de participar en elecciones significativamente inferiores a las de quienes habitan municipios donde sólo se recurrió a la erradicación manual.

Adicionalmente, los resultados coinciden con estudios precedentes en la medida en que muestran que la probabilidad individual de votar está negativamente relacionada con el nivel de control paramilitar y positivamente asociada con la pobreza (NIB). Por otro lado, los resultados de las

¹⁹ Para el cálculo de las probabilidades esperadas, las variables incluidas en el modelo se dejaron iguales a cero. Para todos los cálculos que se presentan en esta sección, el mínimo de hectáreas cultivadas de coca es cero, el promedio es 110, y el máximo es 4.800. Estos datos corresponden al promedio y máximo de cultivos de coca para los municipios 75 municipios incluidos en la muestra del LAPOP.

variables de nivel individual, indican un efecto positivo y significativo de las variables educación, edad, eficacia externa, identificación partidista, e involucramiento político, sobre la probabilidad de votar en elecciones locales.

Ahora bien, ¿la participación de qué tipo de ciudadanos se ve más o menos afectada por la influencia del narcotráfico como fenómeno contextual?, Los resultados del modelo 2 para voto (Cuadro 1) sugieren que las personas más educadas, quienes tienen un nivel alto de apoyo al sistema y los militantes de los partidos tradicionales serían menos susceptibles al efecto negativo del aumento de los cultivos ilícitos sobre la probabilidad de participar en elecciones locales. En el caso de la variable educación, los resultados indican que si bien las personas menos educadas tienen una probabilidad menor de votar en elecciones locales, entre las personas con formación universitaria (16 años de educación), el impacto negativo del aumento de los cultivos ilícitos sobre la probabilidad de votar es prácticamente inexistente (0,03 puntos al pasar del mínimo al máximo de hectáreas cultivadas). Al contrario, entre las personas sin ninguna escolaridad, al pasar de municipios sin coca a municipios con la máxima extensión de cultivos ilícitos, la probabilidad de votar cae aproximadamente 0,27 puntos.

Aún más interesante es el caso de la variable apoyo al sistema. Entre las personas que perciben que el sistema político colombiano es ilegítimo, el aumento de los cultivos de coca produce un desplome de la probabilidad de participar en elecciones. En este caso, la probabilidad esperada de votar pasa de 0,56 a 0,35. Este resultado sugiere que los cambios en la conducta política de la ciudadanía, que estimularía el narcotráfico, se potencian cuando existen percepciones negativas sobre el Estado colombiano. Entonces, un fenómeno como la aparición de nuevos órdenes políticos, estaría sustentado tanto en el crecimiento y consolidación de fenómenos como el narcotráfico, y en la poca creencia de la ciudadanía en la legitimidad de las instituciones estatales.

La identidad partidista es un tercer factor, de tipo individual, que modera el efecto de las variables contextuales asociadas al narcotráfico. A medida que el área cultivada de coca pasa del mínimo al máximo, la disminución de la probabilidad de votar es más o menos 0,12 unidades entre los miembros de los partidos Liberal y Conservador.²⁰ Por su parte, esa reducción entre los

²⁰ Pasa de 0.67 a 0.55.

simpatizantes de otros partidos es de más o menos 0,26 unidades.²¹ ¿Cómo se puede interpretar este resultado? Una posible respuesta tiene que ver con el papel que han jugado los partidos tradicionales en la reconstrucción o redefinición de los órdenes políticos locales. En muchas zonas del país, la influencia del narcotráfico y otras organizaciones ilegales en la política local se ha dado a través de pactos con dirigentes políticos locales, la mayoría de ellos relacionados con redes políticas liberales o conservadoras (Zuñiga 2007; López 2007). Los pactos políticos entre mafias y políticos tradicionales estimularían la aparición de monopolios políticos locales que conviven con prácticas electorales rutinarias, en las que los partidos no tradicionales tendrían muy poco juego político, desestimulando a los simpatizantes de estos partidos a participar en los procesos electorales.

Los resultados del análisis sobre la relación entre cultivos ilícitos, estrategias de erradicación y participación en protestas indican, como lo muestra el Cuadro 1 (columna 3), que ninguno de los factores contextuales parece tener un impacto significativo sobre la probabilidad de involucramiento en formas de participación no electorales. Ni la mayor incidencia de cultivos ilícitos, ni el endurecimiento de las estrategias de erradicación de los mismos estarían estimulando a la ciudadanía a participar en la esfera pública a través de protestas. Este resultado resulta desconcertante dado que existe evidencia cualitativa que sugiere que en zonas con presencia de cultivos ilícitos han tenido lugar importantes manifestaciones en contra del Estado (Ramírez 2001). Sin embargo, este resultado podría tener sentido desde dos puntos de vista. Primero, la evidencia cualitativa podría estar capturando eventos excepcionales, y en efecto el vínculo entre narcotráfico y participación no electoral sería inexistente. Segundo, lo que podría indicar este resultado es que la participación en protestas tiene lugar en múltiples contextos. Es decir, esta no es un recurso exclusivo de habitantes de zonas marginadas o bajo influencia de agentes ilegales.

Los resultados sugieren que son los factores individuales los que presentan un efecto significativo en la participación en protestas. Son los ciudadanos más educados, los más sofisticados políticamente, los más involucrados en actividades partidistas y los individuos que tienen una evaluación negativa sobre la legitimidad del Estado, los más proclives a involucrarse en marchas y protestas. En contraste con el modelo sobre participación electoral, la sofisticación

²¹ Pasa de 0.57 a 0.31.

política y ser crítico del Estado son variables que sólo juegan un papel explicativo para la participación en protestas. Esto resulta intuitivo en la medida en que las personas con un conocimiento político más elaborado podrán encontrarse con aspectos del funcionamiento del Estado y de lo público que les despierten inconformidades, y quienes tengan menores niveles de apoyo al sistema político serán más proclives a confrontarlo.

Cultivos ilícitos, estrategias de erradicación y confianza

Los modelos jerárquicos para confianza en la alcaldía, la Policía y los actores armados, incluyen una serie de variables individuales en el nivel-1,²² y usan las mismas cinco variables contextuales (NBI, nivel de control guerrillero, nivel de control paramilitar, hectáreas de coca cultivadas y estrategia de erradicación) para modelar el intercepto de la ecuación de nivel-1.

Los resultados sobre confianza en instituciones estatales que se presentan en el Cuadro 2 sugieren que sólo las variables contextuales asociadas al narcotráfico tienen un impacto en las evaluaciones ciudadanas de confianza. En el caso de las alcaldías municipales, la única variable contextual estadísticamente significativa es cultivos ilícitos. El aumento del área cultivada de coca va en detrimento de las evaluaciones de confianza en el ejecutivo local. En zonas donde no existen cultivos ilícitos la confianza promedio se ubica cerca de 57 (en una escala de 0 a 100). Cuando las hectáreas de coca llegan a 110 hectáreas, el nivel promedio para los municipios de la muestra, la disminución de la calificación de confianza es mínima. Sólo en aquellos municipios donde las hectáreas cultivadas de coca se acercan al nivel máximo (más de 4.500 Has.), la calificación de confianza cae poco más de 10 puntos. El que los efectos negativos de los cultivos ilícitos se hagan más evidentes en las zonas donde éstos alcanzan niveles muy altos podría significar que con el incremento del área cultivada de coca, el narcotráfico adquiere mayor injerencia social y política. Esto iría en detrimento de la confianza hacia el ejecutivo local debido a que esta institución perdería capacidad de acción y gestión. Por otro lado, la confianza en la alcaldía podría caer si los ciudadanos perciben que con el aumento del poder del narcotráfico, el ejecutivo local termina al servicio de las mafias de las drogas y no de la ciudadanía.

CUADRO 2 AQUÍ

²² Las variables de nivel individual que se incluyen en los modelos de confianza son: educación, edad, género, estatus socioeconómico, urbanización, sofisticación, identidad partidista tradicional, evaluación sociotrópica de la economía actual, evaluación sociotrópica de la economía futura y un índice de provisión de bienes públicos.

En el caso de la Policía, tanto los cultivos ilícitos como la estrategia de erradicación aparecen con un impacto significativo sobre la confianza ciudadana en esta institución. En contra de lo esperado, el aumento de los cultivos ilícitos incrementa la confianza en la Policía, ésta se eleva casi 10 puntos al pasar de municipios sin cultivos de coca, a aquellos con el nivel máximo de hectáreas cultivadas. No obstante esta relación deja de ser significativa cuando se introducen algunas interacciones entre variables de nivel individual y cultivos ilícitos. Por otra parte, el análisis estadístico mostró que la confianza en la Policía sí se ve afectada por la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos que se ponga en marcha en el municipio. En las zonas donde no se ejecutó ninguna estrategia de erradicación, la confianza promedio en la Policía se ubica en 62. Si se pasa a zonas en donde sólo se hace uso de la erradicación manual, la confianza en la Policía cae a 57. Finalmente, en zonas donde se combinan tanto la erradicación manual como la erradicación por aspersión aérea, la confianza en la institución policial cae a 53. Este resultado sugiere que la ciudadanía tiene claro que la responsabilidad de la erradicación de cultivos recae en la Policía, pues la percepción de confianza en esta institución fue la única que se vio afectada por el endurecimiento de las estrategias de combate a los cultivos ilícitos. Parece que la ciudadanía le pasa la cuenta de cobro al ejecutor de política de erradicación y no al agente político responsable de su promoción.

Con relación al papel de las variables individuales, los resultados indican que la confianza en la alcaldía aparece como una función de las percepciones del desempeño gubernamental, algunos factores políticos y ciertas características sociodemográficas. Los ciudadanos que califican positivamente la provisión de bienes públicos y perciben que la economía nacional va por buen camino, tienden a confiar en la alcaldía municipal. Lo mismo sucede con quienes se identifican con los partidos tradicionales. Por su parte, ciudadanos más sofisticados políticamente tienden a confiar menos en la alcaldía que sus contrapartes menos conocedoras de política. Por su parte, la confianza en la Policía está asociada positivamente con las percepciones de desempeño político y económico, lo mismo que con la edad, y negativamente con el nivel socioeconómico del encuestado. Aunque la Policía no es responsable del manejo de la economía o de la provisión de ciertos bienes públicos (excepto seguridad), se beneficiaría de las buenas percepciones que sobre el desempeño del gobierno tienen los ciudadanos.

Al igual que en los modelos de participación electoral, se exploraron algunas interacciones entre variables de nivel individual y las variables contextuales que mostraron efectos significativos. Sólo en el caso de la variable cultivos ilícitos se encontraron interacciones significativas con variables de nivel individual. En el caso de la confianza hacia la alcaldía municipal, se encontró un efecto mediador de las evaluaciones sobre el futuro de la economía nacional, en la relación entre cultivos ilícitos y confianza. El efecto negativo de los cultivos ilícitos sobre confianza en la alcaldía sólo se sostiene para personas que consideran que la economía nacional va por mal camino. Para estas personas la calificación de confianza cae de 57 a 46, al pasar del mínimo al máximo de hectáreas cultivadas con coca. En oposición, para quienes consideran que la economía estará mejor en el futuro, el aumento de los cultivos ilícitos coincide con un incremento de 17 puntos en la calificación de confianza hacia la alcaldía.²³ En esta misma línea, el efecto de la misma interacción en los niveles de confianza en la Policía, mostró que para quienes creen que la economía mejorará y para quienes consideran que seguirá igual, se produce un aumento importante en la calificación de confianza hacia la Policía, a medida que se pasa del mínimo al máximo de área municipal cultivada con coca. Para el primer grupo de ciudadanos la calificación de confianza pasa de 67 a 95, para el segundo grupo aumenta de 64 a 68. Para quienes ven que la economía empeorará, las calificaciones de confianza hacia la institución policial prácticamente no cambian con el aumento de los cultivos ilícitos. Estos dos resultados sugieren que en contextos donde el narcotráfico tiene una alta incidencia, los cambios en las evaluaciones ciudadanas sobre la economía nacional producirán percepciones de confianza mucho más dispersas. En zonas donde predominan los cultivos ilícitos, los ciudadanos castigan al ejecutivo local con mayor dureza cuando perciben problemas de desempeño económico, y lo premian con más generosidad cuando la economía va bien. La percepción de confianza hacia la Policía, en cambio, no se ve afectada por las visiones negativas sobre la economía. Es probable que estos resultados se deban a que en zonas dominadas por la economía de las drogas las crisis y las bonanzas económicas generan impactos mucho más radicales y notorios que en otras zonas.

Pasando a los modelos sobre confianza hacia las FARC y los paramilitares (Cuadro 3), los resultados sugieren que sólo las percepciones de confianza hacia los paramilitares se ven afectadas positivamente por un aumento en los cultivos ilícitos. Al pasar de zonas sin cultivos

²³ Para estas personas la calificación de confianza aumenta de 62 a 79, al pasar del mínimo al máximo de hectáreas cultivadas con coca.

ilícitos a municipios con el nivel máximo de áreas cultivadas de coca, la confianza hacia los paramilitares se incrementa más o menos 10 puntos, de 7.6 a 17.5. Aunque las calificaciones de confianza hacia los paramilitares, para cualquier nivel de cultivos ilícitos, se ubican en la parte baja de la escala de confianza, este resultado denota que los paramilitares aumentan su aceptación social a medida que se da una mayor incidencia del negocio de las drogas.

CUADRO 3 AQUÍ

En relación al impacto de las variables individuales sobre la confianza en los actores armados, los resultados muestran que las percepciones de desempeño gubernamental no inciden en las opiniones de confianza hacia estos grupos ilegales. Es decir, no se puede afirmar que los problemas de desempeño gubernamental favorecen a los agentes ilegales. El que la ciudadanía sienta que la economía va mal o que el gobierno se desempeña mal en materia de provisión de bienes públicos, no implica una mejoría en las percepciones de confianza de los actores armados. Este resultado sugiere que la ciudadanía sabría bien que los criterios para juzgar a organizaciones estatales y no estatales, no podrían ser los mismos, incluso en contextos en los que el Estado es bastante débil. Las variables de nivel individual que mostraron un efecto significativo en las percepciones de confianza hacia FARC y paramilitares fueron en su mayoría de tipo sociodemográfico. En el caso de la guerrilla, educación y urbanización tienen un efecto positivo en la confianza ciudadana hacia esta organización, mientras que sofisticación política tiene un impacto negativo. En cuando a la confianza hacia los paramilitares, educación y urbanización aparecen también con un impacto positivo. Así mismo, los hombres y los militantes de los partidos tradicionales confían significativamente más en esta organización ilegal, que las mujeres y los simpatizantes de los partidos independientes o la izquierda.

Resulta interesante el vínculo entre identidad política y confianza, pues de alguna manera demuestra que el apoyo que han recibido los paramilitares por parte de muchas elites políticas liberales y conservadoras, cuenta con un correlato de apoyo ciudadano igualmente importante. Por otro lado, si se asume que en muchas regiones de Colombia la aparición de nuevos ordenes sociales se dio de la mano de la coalición paramilitares-narcotráfico, la mayor confianza que reciben los paramilitares de los militantes de los partidos tradicionales indicaría que los nuevos ordenes sociales cuentan con las mismas bases de apoyo ciudadanas que los ordenes sociales precedentes. Es decir, la ciudadanía se adaptaría a contextos sociales cambiantes.

Finalmente, para el caso de confianza en paramilitares se encontró que el efecto de los cultivos ilícitos en las evaluaciones de confianza en esta organización está mediado por la identidad partidista.²⁴ Entre las personas que se identificaron como liberales y conservadores, al pasar del mínimo al máximo de área cultivada de coca, la confianza en los paramilitares creció de 10 a 26. En contraste, entre los militantes de otros partidos, el incremento de los cultivos ilícitos produjo una caída en los niveles de confianza hacia los paramilitares de más o menos 7 a 0. Este resultado es bastante relevante pues revela que en zonas con alta incidencia de cultivos ilícitos, la principal base de apoyo de los paramilitares son los miembros de los partidos tradicionales. A su vez, este hallazgo no es sorprendente si se tiene en cuenta las evidencias del vínculo entre partidos tradicionales y organizaciones paramilitares. Lo interesante es constatar cómo y entre quienes, el narcotráfico contribuye al crecimiento de las bases de apoyo de las organizaciones criminales.

Conclusiones y recomendaciones de política pública

En términos generales, la evidencia empírica que se presentó en este capítulo indica que existen diferencias significativas entre las opiniones y conductas políticas de las personas que habitan en zonas bajo la influencia de los cultivos ilícitos, y las de quienes viven en áreas libres de este fenómeno. Comparados con las personas que viven en zonas libres de cultivos de coca, los ciudadanos que habitan áreas donde se cultiva este producto tienden a participar menos en procesos electorales, registran niveles de confianza en las instituciones estatales significativamente menores y tienden a confiar más en los paramilitares. Es importante destacar que las diferencias en la conducta política y las actitudes políticas que se mencionaron anteriormente, se hacen evidentes fundamentalmente en aquellos municipios donde la incidencia de cultivos ilícitos es muy alta. En otras palabras, se necesita de una consolidación del fenómeno del narcotráfico a nivel local para que su relación con la conducta y opiniones políticas sea notoria.

Los resultados de este capítulo también indican que a medida que el Estado colombiano endurece su estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, los niveles de confianza ciudadana en la Policía presentan un declive significativo. A las consecuencias negativas para los ecosistemas y la salud

²⁴ Para el modelo de confianza en las FARC no se exploraron interacciones ente niveles debido a que las variables contextuales no fueron significativas estadísticamente.

humana (IDEA 2005) que representan estrategias de erradicación de cultivos ilícitos como la aspersión aérea, habría que sumar el precio que el Estado estaría pagando en términos políticos a través del debilitamiento de la confianza hacia la Policía. Este precio puede resultar irrelevante (una reducción de confianza de 4 puntos), frente a la eficacia del método de erradicación. Sin embargo, en un contexto de debilidad del Estado y aparición de nuevos órdenes locales impulsados por agentes ilegales, este resultado adquiere mayor relevancia y debería conducir a una evaluación más profunda y detenida del impacto político de la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea.

Este capítulo también permitió identificar cómo algunos factores individuales moderan el efecto de las manifestaciones del narcotráfico en la conducta y opiniones políticas de las personas. Por ejemplo, entre las personas con malas percepciones sobre legitimidad del Estado, el efecto de desmovilización electoral asociado con el aumento de los cultivos ilícitos se potencia. Es decir, las consecuencias negativas del negocio de las drogas se nutren de la poca legitimidad que tiene el Estado colombiano entre algunos ciudadanos. Aquí también se mostró que las personas que califican como buena la labor de los gobiernos locales en materia de provisión de bienes públicos confían más en las instituciones estatales. Estos resultados dan pistas sobre cómo podrían trabajar los gobiernos nacional, regional y local, en materia de políticas públicas para minimizar los efectos negativos del narcotráfico. Inversiones públicas para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, como la justicia, o los servicios de salud, para mencionar apenas dos ejemplos, podrían redundar en un aumento de la confianza ciudadana hacia el Estado, lo que minimizaría el efecto desmovilizador a nivel electoral del narcotráfico. En otras palabras, mejoras en el desempeño gubernamental, en materia de provisión de bienes públicos, mejorarían las percepciones ciudadanas sobre la legitimidad estatal, lo que a su vez minimizaría la influencia de las mafias de las drogas sobre la conducta y opiniones políticas de los ciudadanos.

Aquí también se demostró que el efecto de desmovilización electoral producido por el aumento de los cultivos de coca se manifiesta principalmente entre los militantes de las minorías políticas. Por otro lado, se presentó evidencia según la cual el aumento de la confianza hacia los paramilitares, que se desprende del aumento de los cultivos de coca, se da exclusivamente entre los simpatizantes de los partidos tradicionales. Estos resultados no resultan sorprendentes pues son una manifestación de la relación entre narcotráfico, actores armados y élites políticas. Lo

interesante es que sugieren, en primer lugar, que en la “sociedad” entre actores legales e ilegales, los políticos vinculados a los partidos tradicionales son los principales protagonistas del lado “legal”. Esto a su vez redundante en una pérdida de juego político de los sectores independientes y de izquierda, que se manifiesta en una desmovilización electoral masiva de los simpatizantes de estos partidos. En segundo lugar, los vínculos entre políticos y agentes ilegales producen efectos específicos sobre las bases de apoyo de los agentes ilegales. Si ciertos sectores políticos se benefician electoralmente de su relación con el narcotráfico y las organizaciones ilegales, estas últimas se benefician políticamente de su relación con los políticos, en tanto aumentan sus bases de apoyo entre los militantes de los partidos con los que se asocian políticamente.

Frente a estos resultados es fundamental que el Estado colombiano sostenga y aumente sus esfuerzos en contra de la penetración de las mafias de las drogas en la política local y nacional, pues ésta afecta la competencia política y las oportunidades de éxito electoral de partidos pequeños y contribuye a que agentes ilegales aumenten sus bases de apoyo ciudadano. La justicia colombiana debe contar con apoyo político, técnico y económico para desenmascarar y desarticular las relaciones entre agentes ilegales y políticos. En este sentido se podrían promover reformas legales que aumenten los costos políticos, económicos y jurídicos de los partidos que tengan en sus filas a personas vinculadas con las mafias de las drogas o los actores armados.

En síntesis, los resultados de este capítulo sugieren tres áreas de acción en términos de política pública para reducir el impacto del narcotráfico sobre la conducta política y las percepciones de confianza en las instituciones estatales de los ciudadanos. En primer lugar, se deberían evaluar las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos en función de su conveniencia política versus su efectividad. En segundo término, se debe trabajar a nivel gubernamental en la provisión más efectiva y eficiente de bienes y servicios públicos en áreas afectadas por los cultivos ilícitos, con el propósito de evitar que las organizaciones ilegales aumenten sus bases de apoyo. Finalmente, el Estado colombiano y los partidos políticos deben trabajar para desarticular la influencia de las mafias de las drogas sobre la política.

Referencias

Betancourt, Darío, y Marta García. 1994. *Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia social de la mafia colombiana (1965-1992)*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

- Camacho, Álvaro. 1988. *Droga y sociedad en Colombia. El poder y el estigma*. Bogotá: CISDE, Universidad del Valle, CEREC.
- . 2009. "Paranarcos y Narcoparas: trayectorias delincuenciales y políticas." En *A la sombra de la guerra. Ilegalidad y nuevos órdenes regionales en Colombia*, ed. Á. Camacho, G. Duncan, C. Steiner, R. Vargas y M. E. Wills. Bogotá: Ediciones Uniandes, CESO.
- Camacho, Álvaro, Andrés López, y Francisco Thoumi. 1999. *Las drogas: Una guerra fallida. Visiones críticas*. Bogotá: IEPRI, Tercer Mundo Editores.
- Duncan, Gustavo. 2009. "El dinero no lo es todo: acerca del narcotráfico en la persistencia del conflicto colombiano." En *A la sombra de la guerra. Ilegalidad y nuevos órdenes regionales en Colombia*, ed. Á. Camacho, G. Duncan, C. Steiner, R. Vargas y M. E. Wills. Bogotá: Ediciones Uniandes, CESO.
- Espinal, Rosario, Joonathan Hartlyn, y Jana Morgan Kelly. 2006. "Performance Still Matters. Explaining Trust in Government in the Dominican Republic." *Comparative Political Studies* 39 (2).
- García, Miguel. 2009. *Political Violence and Electoral Democracy in Colombia. Participation and Voting Behavior in Violent Contexts*. Disertación doctoral, Departamento de Ciencia Política, Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, PA.
- García Sánchez, Miguel. 2010. "Bajo la mira de los actores armados. Contextos violentos, participación política e intención de voto en Colombia." En *Conflicto armado, seguridad y construcción de paz en Colombia: Cuatro décadas de Ciencia Política en la Universidad de los Andes*, ed. A. Rettberg. Bogotá: Departamento de Ciencia Política, Ediciones Uniandes.
- Gibson, Edward L. 2005. "Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Democratic Countries." *World Politics* 58:102.
- Giles, Michael W., y Marilyn K. Dantico. 1982. "Political Participation and Neighborhood Social Context Revisited." *American Journal of Political Science* 26 (1):144-50.
- Gimpel, James G., y J. Celeste Lay. 2005. "Party Identification, Local Partisan Contexts, and the Acquisition of Participatory Attitudes." En *The Social Logic of Politics. Personal Networks as Contexts for Political Behavior*, ed. A. S. Suckerman. Philadelphia: Temple University Press.
- Hartlyn, Jonathan. 1993. "Drug Trafficking and Democracy in Colombia in the 1980s." Working Paper No. 70. Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials.
- Hernandez, Manuel. 1997. "Comportamientos y búsquedas alrededor del narcotráfico." En *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social*, ed. F. Thoumi. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección Nacional de Estupefacientes, Editorial Ariel.
- Huckfeldt, Robert. 1979. "Political Participation and the Neighborhood Social Context." *American Journal of Political Science* 23 (3):579-92.
- . 1986. *Politics in Context: Assimilation and Conflict in Urban Neighborhoods*. New York: Agathon Press.
- Huckfeldt, Robert, y John Sprague. 1987. "Networks in Context: The Social Flow of Political Information." *American Political Science Review* 81 (4):1197-216.
- . 1993. "Citizens, Contexts, and Politics." En *Political Science: The State of the Discipline II*, ed. A. Finifter. Washington D.C.: American Political Science Association.
- IDEA, Instituto de Estudios Ambientales 2005. *Observaciones al "Estudio de los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida (PECIG), y de los cultivos ilícitos en la salud humana"*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, IDEA.
- Kenny, Christopher B. 1992. "Political Participation and Effects from the Social Environment." *American Journal of Political Science* 36 (1):259-67.
- Lee, Valerie E., y Anthony S. Bryk. 1989. "A Multilevel Model of the Social Distribution of High School Achievement." *Sociology of Education* 62 (3):172-92.
- López, Claudia. 2007. "La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia 1997 a 2007." En *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, ed. M. Romero. Bogotá: Intermedio Editores.

- Mishler, William, y Richard Rose. 1997. "Trust, Distrust and Skepticism: Popular Evaluations of Civil and Political Institutions in Post Communist Societies." *The Journal of Politics* 59 (2):418-51.
- . 2001. "What are the Origins of Political Trust: Testing Institutional and Cultural Theories in Post-communist Societies." *Comparative Political Studies* 34 (1):30-60.
- Mondak, Jeffery J., Diana C. Mutz, y Robert Huckfeldt. 1996. "Persuasion in Context: The Multilevel Structure of Economic Evaluations." En *Political Persuasion and Attitude Change*, ed. D. C. Mutz, P. M. Sniderman y R. A. Brody. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Nagin, Daniel S. 2005. *Group-Based Modeling of Development*. Cambridge: Harvard University Press.
- Raudenbush, Stephen W., y Anthony S. Bryk. 2002. *Hierarchical Linear Models. Applications and Data Analysis Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Salazar, Alonso. 2001. *Drogas y narcotráfico en Colombia*. Bogotá: Planeta.
- Thoumi, Francisco. 2002a. *El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes*. Bogotá: Planeta, IEPRI.
- . 2002b. "Illegal Drugs in Colombia: From Illegal Economic Boom to Social Crisis." En *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 528:102-16.
- Tullis, LaMond. 1995. *Unintended Consequences: Illegal Drugs and Drug Policies in Nine Countries*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Weatherford, M. Stephen. 1982. "Interpersonal Networks and Political Behavior." *American Journal of Political Science* 26 (1):117-43.
- Weldon, Steven A. 2006. "The Institutional Context of Tolerance for Ethnic Minorities: A Comparative, Multilevel Analysis of Western Europe." *American Journal of Political Science* 50 (2):331-49.
- Zuñiga, Priscila. 2007. "Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena." En *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, ed. M. Romero. Bogotá: Intermedio Editores.

Cuadro 1. Modelos jerárquicos para participación electoral y participación en protestas

Efectos Fijos	Voto				Protestas	
	Modelo 1		Modelo 2		Modelo 1	
	Coeficiente	EE	Coeficiente	EE	Coeficiente	EE
Predictores de Nivel-2						
Intercepto	0,313 *	0,133	0,312 *	0,133	-1,688 ***	0,172
NBI	0,008 **	0,003	0,008 **	0,003	0,002	0,005
Control guerrillero	0,028	0,111	0,026	0,110	-0,053	0,123
Control paramilitar	-0,142 *	0,069	-0,143 *	0,068	0,181	0,139
Has. de coca	-0,0002 ***	0,000	-0,0002 **	0,000	0,000	0,000
Estrategia de erradicación	0,157	0,116	0,158	0,115	-0,007	0,142
Predictores de Nivel-1						
Educación	0,063 ***	0,014	0,063 ***	0,014	0,076 ***	0,014
Has. de coca			0,000 *	0,000		
Edad	0,024 ***	0,003	0,024 ***	0,004	-0,001	0,004
Apoyo al sistema	-0,001	0,002	-0,001	0,002	-0,006 *	0,003
Has. de coca			0,000 **	0,000		
Género	0,032	0,105	0,028	0,105	0,103	0,113
Estatus socioeconómico	0,000	0,003	0,000	0,003	0,005	0,003
Urbano v. rural	0,083	0,139	0,081	0,141	0,273	0,146
Eficacia externa	0,232 **	0,078	0,237 **	0,078	0,012	0,131
Has. de coca			0,000 ***	0,002		
Sofisticación	0,001	0,002	0,001	0,002	0,006 **	0,002
Identidad partidista tradicional	0,445 ***	0,096	0,445 ***	0,096	-0,145	0,108
Has. de coca			0,000 *	0,000		
Involucramiento político	0,020 ***	0,096	0,020 ***	0,003	0,015 ***	0,002
Efectos Aleatorios						
Componentes de varianza						
Efectos del nivel municipal	0,138		0,136		0,314	
Efectos del nivel individual	0,372		0,369		0,561	
Confiabilidad del intercepto	0,436		0,432		0,553	
Porcentaje explicado †	0,284		0,296		0,031	

Nota. ***p < .001. **p < .01. * p < .05.

† Porcentaje de la varianza entre municipios explicada por las variables de nivel 2

Cuadro 2. Modelos jerárquicos para confianza en instituciones estatales

Efectos Fijos	Confianza Alcaldía				Confianza Policía			
	Modelo 1		Modelo 2		Modelo 1		Modelo 2	
	Coficiente	EE	Coficiente	EE	Coficiente	EE	Coficiente	EE
Predictores de Nivel-2								
Intercepto	57,429 ***	2,595	57,400 ***	2,587	60,998 ***	2,253	60,861 ***	2,251
NBI	0,035	0,035	0,358	0,035	-0,033	0,045	-0,034	0,046
Control guerrillero	2,011	1,440	1,963	1,440	1,258	1,659	1,178	1,674
Control paramilitar	0,946	1,234	0,945	1,224	1,729	1,161	1,721	1,163
Has. de coca	-0,002 **	0,001	-0,002 **	0,001	0,002 *	0,001	0,000	0,001
Estrategia de erradicación	-0,667	1,400	-0,613	1,406	-4,502 *	1,998	-4,376 *	2,032
Predictores de Nivel-1								
Educación	0,096	0,260	0,113	0,262	-0,135	0,212	-0,112	0,212
Edad	0,194 ***	0,056	0,201 ***	0,055	0,158 **	0,050	0,157 **	0,050
Has. de coca			0,000 ***	0,000			0,000 *	0,000
Género	-4,011 ***	1,061	-4,165 ***	1,051	-1,462	1,2321	-1,559	1,230
Estatus socioeconómico	-0,153 ***	0,042	-0,156 ***	0,042	-0,058	0,033	-0,059	0,033
Urbano v. rural	-2,065	2,917	-2,010	2,902	-1,331	2,002	-1,256	2,002
Sofisticación	-0,067 ***	0,026	-0,067 **	0,025	-0,036	0,031	-0,035	0,031
Identidad partidista tradicional	2,923 *	1,365	3,061 *	1,360	2,867	1,467	2,860	1,503
Eval. sociotrópica actual	0,068	0,036	0,072 *	0,036	0,023	0,030	0,025	0,030
Eval. sociotrópica futura	0,049 **	0,020	0,050 *	0,020	0,065 ***	0,019	0,065 ***	0,018
Has de coca			0,000 ***	0,000			0,000 ***	0,000
Indic.provision de bienes publicos	0,475 ***	0,056	0,482 ***	0,055	0,3476 ***	0,062	0,346 ***	0,062
Has de coca							0,000 ***	0,000
Efectos Aleatorios								
Componentes de varianza								
Efectos del nivel municipal	32,660		32,826		53,644		54,782	
Efectos del nivel individual	5,715		5,729		7,324		7,4015	
Confiabilidad del intercepto	0,459		0,461		0,559		0,564	
Porcentaje explicado †	0,420		0,414		0,245		0,234	

Nota. ***p < .001. **p < .01. * p < .05.

† Porcentaje de la varianza entre municipios explicada por las variables de nivel 2

Cuadro 3. Modelos jerárquicos para confianza en organizaciones armadas ilegales

Efectos Fijos	Confianza FARC		Confianza Paramilitares			
	Modelo 1		Modelo 1		Modelo 2	
	Coficiente	EE	Coficiente	EE	Con interacciones entre niveles	
	Coficiente	EE	Coficiente	EE	Coficiente	EE
Predictores de Nivel-2						
Intercepto	6,247 ***	1,152	7,764 ***	1,291	7,647 ***	1,457
NBI	0,012	0,031	0,042	0,042	0,043	0,039
Control guerrillero	1,067	1,352	0,116	1,061	0,067	1,383
Control paramilitar	-0,623	0,844	0,881	1,311	0,859	1,086
Has. de coca	0,001	0,000	0,002 **	0,001	-0,002 *	0,002
Estrategia de erradicación	1,036	1,019	-0,741	1,305	-0,683	1,313
Predictores de Nivel-1						
Educación	0,588 ***	0,123	0,407 **	0,142	0,418 **	0,158
Edad	0,045	0,025	-0,034	0,042	-0,029	0,040
Género	0,278	0,957	1,950 *	0,915	1,960 *	1,027
Estatus socioeconómico	-0,034	0,027	-0,032	0,031	-0,033	0,031
Urbano v. rural	3,479 **	1,077	3,531 **	1,000	3,466 **	1,369
Sofisticación	-0,055 **	0,016	-0,015	0,023	-0,016	0,022
Identidad partidista tradicional	1,220	0,907	2,639 **	1,023	2,749 **	1,059
Has. de coca					0,005 ***	0,002
Eval. sociotrópica actual	0,011	0,022	0,038	0,023	0,039	0,025
Eval. sociotrópica futura	-0,008	0,011	0,015	0,018	0,015	0,014
Indic.provision de bienes publicos	0,030	0,034	0,049	0,046	0,049	0,038
Efectos Aleatorios						
Componentes de varianza						
Efectos del nivel municipal	16,090		20,929		20,998	
Efectos del nivel individual	4,011		4,575		4,582	
Confiabilidad del intercepto	0,493		0,462		0,464	
Porcentaje explicado †	0,274		0,290		0,284	

Nota. ***p < .001. **p < .01. * p < .05.

† Porcentaje de la varianza entre municipios explicada por las variables de nivel 2